

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, POR EL CUAL ESTABLECE LA CONTINUIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN LLEVADOS A CABO POR ESTE ORGANISMO, DERIVADO DEL DECRETO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EN FECHA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE

A N T E C E D E N T E S

I.- Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria del Consejo General de este Organismo llevada a cabo el día treinta de junio del año dos mil cuatro, se aprobó, entre otros acuerdos, el identificado con el número CG/AC-050/04, por el que se aprueba el Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

En dicho reglamento se contemplan tres etapas del procedimiento de fiscalización a cargo de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación; la Comisión Revisora y el Consejo General, respectivamente.

II.- En sesión ordinaria de fecha trece de noviembre de dos mil seis, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó el instrumento número CG/AC-010/06, a través del cual constituyó las Comisiones Permanentes de este Organismo, de entre dichos órganos auxiliares del Consejo General se encuentra la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos, integrada por los siguientes Consejeros Electorales:

Mtra. Rosalba Velázquez Peñarrieta
Mtro. Paul Monterrosas Román
Mtro. Miguel David Jiménez López
Dra. Alicia Olga Lazcano Ponce
Mtro. José Víctor Rodríguez Serrano
Mtro. Juan Carlos de la Hera Bada
Dr. Fidencio Aguilar Víquez

III.- En sesión Ordinaria de fecha diecinueve de junio del año dos mil siete, la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos tomó el acuerdo identificado como 01/CRAF/190607, cuya literalidad es la siguiente:

“ACUERDO-01/CRAF/190607.- Con base en lo consignado en la presente acta, en la que se detalla análisis realizado por el Titular de la Unidad Jurídica respecto a la normatividad que será aplicable para la fiscalización de los ejercicios fiscales dos mil seis y dos mil siete de los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, así como a los razonamientos que se desprenden de la Resolución del Tribunal Electoral del Estado con el número de expediente TEEP-AE- 003/2005 de fecha diecinueve de agosto de dos mil cinco, en particular en fojas 67 y 68, esta Comisión Permanente aprueba por unanimidad de votos, que la normatividad con la que debe concluir el procedimiento fiscalizador de los ejercicios antes mencionados, sea con la misma con la que se inició, por tratarse de una obligación surgida durante la aplicación de Ordenamiento en materia de *Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado* correspondiente, compuesta de diversos actos sucesivos que comprenden el mismo periodo de fiscalización en un año; en este sentido, de conformidad a los diversos 4 y 5 del Reglamento de Fiscalización en cuestión notifíquese el presente acuerdo.”

IV.- Por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintiocho de octubre del año dos mil once, el Honorable Congreso del Estado reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre las que se encuentra el artículo 3 del mencionado Código Político, que entre otras cosas prevé un cambio en la integración del Consejo General, pues suprime las figuras de Director General y Secretario General estableciendo en su lugar la del Secretario Ejecutivo.

V.- De igual forma el día veinte de febrero del año dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el decreto del Honorable Congreso del Estado que reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el mencionado medio oficial de difusión.

En la mencionada documental se reformó, entre otros, el artículo 80 del Código comicial local, fijando así una nueva integración del Consejo General del Organismo, en virtud de la supresión de las figuras del Secretario General y Director General y dar paso a la creación de la figura del Secretario Ejecutivo, de igual forma se realizó reformas a los artículos 52, 52 bis y 53 del citado Código normativo, en donde se atribuyen facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los Partidos Políticos en materia de fiscalización a la Unidad de Fiscalización, siendo por lo tanto un procedimiento a cargo de una sola instancia, al excluir de la misma a la Comisión Revisora y a la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y someter, en su caso, para aprobación del Consejo General los dictámenes correspondientes.

De igual forma, los artículos SEGUNDO y QUINTO transitorios del Decreto aludido previamente, disponen lo siguiente:

“SEGUNDO.- El nuevo esquema de fiscalización comenzará a operar a partir del primero de enero de dos mil doce. El Consejo General aprobará las reglas pertinentes para su adecuada aplicación.”

“QUINTO.- Los asuntos no contemplados en los presentes transitorios vinculados con asuntos administrativos, de quejas y denuncias o de fiscalización en materia electoral y que competan al Instituto, serán resueltos por Acuerdos del pleno del Consejo General.”

VI.- A través del memorándum identificado como IEE-CRAF-0071/12, de fecha veinte de febrero del año dos mil doce, la Presidenta de la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos, Consejera Electoral Rosalba Velázquez Peñarrieta remitió al Consejero Presidente de este Organismo, Licenciado Jorge Sánchez Morales, los siguientes documentos:

- “1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADO POR LA COALICIÓN COMPROMISO POR PUEBLA, REGISTRADA ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO, BAJO EL RUBRO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, ASÍ COMO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO DOS MIL NUEVE DOS MIL DIEZ.
2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADO POR LA COALICIÓN ALIANZA PUEBLA AVANZA, REGISTRADA ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO, BAJO EL RUBRO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, ASÍ COMO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO DOS MIL NUEVE DOS MIL DIEZ.
3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO, BAJO EL RUBRO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, ASÍ COMO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO DOS MIL NUEVE DOS MIL DIEZ.”

VII.- De igual forma, el día veintiuno de febrero del año dos mil doce, mediante el comunicado identificado como IEE-CRAF-0076/12, la Presidenta de la Comisión Revisora remitió al Consejero Presidente los siguientes documentos:

- “1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RELACIÓN CON EL INFORME ANUAL PRESENTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL BAJO LOS RUBROS DEL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y EL ACCESO EQUITATIVO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ,
2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RELACIÓN CON EL INFORME ANUAL PRESENTADO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO BAJO LOS

RUBROS DEL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y EL ACCESO EQUITATIVO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.”

VIII.- El día veinticuatro de febrero del año dos mil doce a través del memorándum IEE/DPPM-115/12, la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación solicitó al Consejero Presidente hiciera del conocimiento del Pleno del Consejo General y se emitiera pronunciamiento respecto al mecanismo a seguir en relación con la fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos en virtud a la reforma electoral, aludida en los antecedentes previos.

IX.- A través del comunicado identificado como IEE-CRVP-001/12, notificado el día veintiocho de febrero del año dos mil doce, la Consejera Electoral Rosalba Velázquez Peñarrieta realizó diversas manifestaciones al Consejero Presidente de este Organismo, dicho memorándum en lo que importa es del tenor literal siguiente:

“... en relación a la reforma, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, reformas relacionadas con la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos y de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, solicito a Usted, se someta a mesa de trabajo del Consejo General lo siguiente:

3.- Lo relacionado a la fiscalización respecto de

- a) Las actividades bajo los rubros del sostenimiento de actividades ordinarias permanente y el acceso equitativo a los medios de comunicación, correspondiente al año dos mil diez.
- b) Las actividades bajo los rubros del sostenimiento de actividades ordinarias permanente y el acceso equitativo a los medios de comunicación, correspondiente al año de dos mil once.
- c) Gastos de campaña bajo el rubro de las actividades tendientes a la obtención del voto durante el proceso electoral extraordinario del voto durante el proceso electoral extraordinario dos mil once.

Lo anterior en términos de la reforma ya citada, toda vez que en dichas Comisiones la suscrita era Presidenta e integrantes de las mismas y en dicha reforma estas Comisiones no son señaladas...”

La documental en comento fue puesta de conocimiento por parte del Consejero Presidente a los integrantes del Consejo General.

X.- El día veintinueve de febrero del año dos mil doce, la Consejera Electoral Rosalba Velázquez Peñarrieta remitió al Consejero Presidente de este Organismo a través del comunicado identificado como IEE-CRVP-002/12, las siguientes documentales:

“Informes consolidados correspondientes a la revisión de los informes Anuales, que incluyen el origen y destino de las ministraciones bajo los rubros del sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y el acceso equitativo a los medios de comunicación, correspondiente al año de dos mil diez de los partidos políticos:

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	DPPM/INF-A-PRD-11	74 FOJAS
PARTIDO DEL TRABAJO	DPPM/INF-A-PT-11	71 FOJAS
PARTIDO NUEVA ALIANZA	DPPM/INF-A-PNA-11	84 FOJAS

...”

De igual forma, en el comunicado de mérito, la Consejera Electoral en comento solicitó al Consejero Presidente de este Organismo lo siguiente:

“Así mismo solicito que con fundamento e (sic) lo señalado en el Decreto citado, respecto a lo señalado en los Transitorios Primero, Segundo y Quinto del mismo, se someta a consideración del órgano Superior de Dirección el nuevo esquema de fiscalización, así como los asuntos pendientes por resolver en la materia, relacionados con los Partidos Políticos Acreditados ante este Instituto Electoral del Estado.

No es óbice señalar que con base en el artículo 2º (sic) Transitorio del Decreto multicitado, le corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobar las reglas pertinentes del nuevo esquema de fiscalización para su adecuada aplicación.”

El comunicado trasunto fue puesto de conocimiento por parte del Consejero Presidente a los integrantes del Consejo General.

XI.- A través del memorándum identificado como IEE/DPPM-0138/12, notificado en fecha dos de marzo del año dos mil doce, la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, Licenciada Amalia Oswelia Varela Serrano informó al Consejero Presidente el estado que guardan los procedimientos de fiscalización del financiamiento público y privado ejercido por los partidos políticos acreditados ante este Organismo Electoral, hasta el día de la publicación de la reforma electoral aludida en antecedentes previos, dicha documental es del tenor literal siguiente:

Tipo de informe y período al que corresponde	Rubro del financiamiento	Partido político ó coalición	Instancia del IEE que lo tiene en revisión, conforme al procedimiento de fiscalización	Estado
Anual 2010	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		PRI	CG	Dictamen recibido por CG, sin observaciones al partido político, pendiente de resolver por CG

Tipo de informe y período al que corresponde	Rubro del financiamiento	Partido político ó coalición	Instancia del IEE que lo tiene en revisión, conforme al procedimiento de fiscalización	Estado
		PRD	CRAF	Informe consolidado recibido por CRAF, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		PT	CRAF	Informe consolidado recibido por CRAF, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		PVEM	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		MC	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones notificadas al partido político y con aclaraciones pendientes de análisis, pendiente de resolver por CG
		PNA	CRAF	Informe consolidado recibido por CRAF, con observaciones pendientes de notificar al partido político
Gastos de Campaña, Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009-2010	Actividades tendientes a la obtención del voto	CPP	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar a la coalición
		APA	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar a la coalición
		PT	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar al partido político
Tercer trimestre 2011	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	DPPPMC	Proceso de definir la existencia de observaciones a notificar a los partidos políticos, para que una vez que se reciban aclaraciones, se realicen los informes parciales que correspondan
		PRI	DPPPMC	
		PRD	DPPPMC	
		PT	DPPPMC	
		PVEM	DPPPMC	
		MC	DPPPMC	
		PNA	DPPPMC	
Cuarto trimestre 2011	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	DPPPMC	Proceso de definir la existencia de observaciones a notificar a los partidos políticos, para que una vez que se reciban aclaraciones, se realicen los informes parciales que correspondan
		PRI	DPPPMC	
		PRD	DPPPMC	
		PT	DPPPMC	
		PVEM	DPPPMC	
		MC	DPPPMC	
		PNA	DPPPMC	
Gastos de Campaña, Proceso Electoral Extraordinario 2011	Actividades tendientes a la obtención del voto	PAN	DPPPMC	Proceso de definir la existencia de observaciones a notificar a los partidos políticos ó coalición, para
		APU	DPPPMC	
		MC	DPPPMC	

Tipo de informe y período al que corresponde	Rubro del financiamiento	Partido político ó coalición	Instancia del IEE que lo tiene en revisión, conforme al procedimiento de fiscalización	Estado
		PNA	DPPPMC	políticos ó coalición, para que una vez que se reciban aclaraciones, se realicen los informes consolidados que correspondan
Anual 2011	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	Se encuentra corriendo, en su caso, el plazo para que los partidos políticos presenten sus informes justificatorios	-----
		PRI		
		PRD		
		PT		
		PVEM		
		MC		
		PNA		

CG = Consejo General

CRAF = Comisión Revisora de la aplicación de los regímenes de financiamiento de los partidos políticos

DPPPMC = Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación

PAN = Partido Acción Nacional

PRI = Partido Revolucionario Institucional

PRD = Partido de la Revolución Democrática

PT = Partido del Trabajo

MC = Movimiento Ciudadano

PNA = Partido Nueva Alianza

CPP = Coalición Compromiso por Puebla

PVEM = Partido Verde Ecologista de México

APA = Coalición Alianza Puebla Avanza

APU = Coalición Alianza Puebla Unida

En el comunicado en alusión, la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación realizó la siguiente precisión:

“Es importante mencionar, que en virtud de que en fechas 15 y 16 de marzo de 2012 vencería, en su caso, el plazo para que esta Unidad Administrativa notifique a los partidos políticos las observaciones que se determinen a los informes justificatorios del tercer trimestre de 2011, es de carácter urgente que el Consejo General se pronuncie respecto a la forma en que se dará continuidad a los procedimientos de fiscalización antes detallados.”

XII.- El día trece de marzo del año dos mil doce, se desarrolló mesa de trabajo en donde los integrantes del Consejo General que se encontraban presentes abordaron, entre otros temas, el relativo al presente acuerdo.

CONSIDERANDO

1.- Que, en términos de lo establecido en el artículo 3 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 71 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, la organización de las elecciones es una función estatal encomendada a un organismo de carácter público y permanente, autónomo e independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Electoral del Estado.

El ejercicio de dicha función se desarrollará observando los principios rectores de: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 8 del Código de la materia.

2.- Que, el diverso 75 del Código en comento establece los fines de este Instituto, entre los que se encuentran los siguientes:

- Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local, las del Código de la materia y demás ordenamientos, que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; y
- Asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de los partidos políticos vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.

De lo anterior, se desprende que este Máximo Órgano de Dirección debe observar las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Política Local como las del Código de Instituciones y Procesos Electorales; vigilar en lo relativo a las prerrogativas y derechos de los partidos políticos; además de que se actúe invariablemente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Bajo esta tesitura, el Consejo General debe aprobar los acuerdos necesarios para ajustar su actividad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, vigilando en todo momento que no se vulnere el principio de legalidad. Además, las mencionadas determinaciones deben tener la finalidad de hacer posible que el Órgano Superior de Dirección cumpla con sus atribuciones y se garantice el respeto a los derechos y prerrogativas que los partidos políticos tienen reconocidos en la Ley Electoral.

3.- Que, los numerales 51, 52, 52 bis y 53 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla contemplan el tema relativo a la revisión y vigilancia del financiamiento de los Partidos Políticos a cargo de una Unidad de Fiscalización, instancia integrante de este Organismo Constitucional, disposiciones que son de la literalidad siguiente:

“ ARTÍCULO 51.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado de la administración de los recursos con que cuenten, que obtengan por cualquier modalidad de financiamiento reconocido en el Código, así como de la presentación de los informes justificatorios de conformidad a las modalidades que establezca la normatividad aplicable para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos.

Dicho órgano se constituirá en los términos, características y modalidades que cada partido político determine según sus estatutos.

ARTÍCULO 52.- El Instituto contará con una Unidad de Fiscalización a cargo de un titular nombrado por la mayoría del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente. La unidad tendrá facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos, los informes justificatorios que presenten sobre el origen y uso de todos sus recursos anuales, de precampaña y campaña, según corresponda, con el sustento documental correspondiente, así como las aclaraciones, documentos e información que considere, para la legal administración de los recursos; además hará del conocimiento del Consejo General de los casos en que los partidos políticos hayan excedido los topes a los gastos de precampaña y campaña que se establezcan para cada elección.

La Unidad gozará de autonomía técnica y de gestión y estará adscrita al Consejero Presidente.

El titular de la Unidad de Fiscalización deberá contar con experiencia previa de tres años en las materias de auditoría, contabilidad, finanzas u otras similares, además de no haber sido miembro de órgano directivo de partido político o agrupación política a cualquier nivel en los últimos cuatro años previos a su designación por el Consejo General.

ARTICULO 52 bis.- Los partidos políticos deberán rendir ante la Unidad de Fiscalización del Instituto, los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

A.- Informes anuales:

I.- Deberán presentarse dentro de los sesenta y cinco días siguientes al mes de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

II.- Se reportarán los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Esto sin perjuicio de que los partidos políticos estén obligados a presentar informes trimestrales en los que se deberá entregar la documentación justificatoria de ese periodo, en los términos y formas que se indiquen en el respectivo reglamento que para ello emita el Consejo General.

B.- Informes de campaña:

I.- Se tendrán que presentar a más tardar dentro de los sesenta y cinco días siguientes contados a partir del día en que concluyan las campañas electorales.

II. Tendrán los partidos políticos, que informar por cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

III.- En estos informes se reportarán el origen de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

C.- Informes de precampaña:

I.- A más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que concluya el proceso interno de selección de candidato, fórmula o planilla, los partidos políticos y/o coaliciones entregarán un informe, que deberá especificar los montos de los ingresos obtenidos, así como los gastos aplicados en cada una de las precampañas para Gobernador, Diputados por ambos principios y miembros de Ayuntamientos respectivamente, dependiendo la elección de que se trate, en los términos y proporciones que este Código establezca; y

II.- Los informes definitivos de gastos de precampaña deberán especificar los montos de los ingresos así como su aplicación en los términos y proporciones que este Código establezca.

ARTÍCULO 53.- La Unidad de Fiscalización efectuará la revisión de los informes, en un período de noventa días posteriores a su entrega por parte de los partidos políticos. Al finalizar dicho término, la Unidad de Fiscalización otorgará a los partidos un período de diez días para que entreguen alcances a su documentación tendiente a subsanar errores y omisiones.

La entrega de los informes y alcances se llevará a cabo en sesiones de audiencia y confronta con los partidos políticos. A dichas reuniones podrán asistir los consejeros electorales que así lo decidan. En todo momento se guardará la debida confidencialidad respecto de la información derivada de los procesos de fiscalización.

La Unidad de Fiscalización presentará al Consejo General, dentro de los diez días siguientes a que finalicen las sesiones de audiencia y de confronta, su dictamen y un proyecto de resolución con propuesta de sanciones correspondientes, en su caso.

En la sesión del Consejo General respectiva, se concederá lugar y palabra al titular de la Unidad de Fiscalización, a fin de que se presenten los dictámenes y proyectos de resolución correspondientes. El Consejo General aprobará en sus términos o modificará los proyectos de resolución que acompañan a los dictámenes. Una vez aprobados los proyectos con las modificaciones pertinentes, el Consejo General fijará la sanción que corresponda y turnará el asunto al Tribunal, para efectos de confirmar o modificar, y en su caso ejecutar la propuesta de sanción fijada por el Consejo General. La Unidad de Fiscalización podrá iniciar procedimientos de auditoría sobre operaciones específicas de financiamiento y gasto de los partidos, así como de revisión por presuntas irregularidades en la materia en que incurran partidos, aspirantes, precandidatos o candidatos.

En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, se otorgará a las partes el debido derecho de audiencia, se valorarán las pruebas presentadas y se someterá el proyecto de resolución, debidamente fundado y motivado, a la aprobación del Consejo General.

Con el objeto de ejercer debidamente las facultades que este Código otorga a la Unidad de Fiscalización, el Instituto suscribirá los convenios con el Instituto Federal Electoral relativos a superar la limitación de información reservada o protegida por los secretos bancario, fiscal y fiduciario, a petición, en su caso, de la propia Unidad del Instituto.”

Las disposiciones legales previamente trasuntadas, contemplan la nueva figura de la Unidad de Fiscalización, la cual tendrá facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos, los informes justificatorios que presenten sobre el origen y uso de todos sus recursos anuales, de precampaña y campaña, según corresponda, con el sustento documental correspondiente, así como las aclaraciones, documentos e información que considere, para la legal administración de los recursos; además hará del conocimiento de este Consejo de los casos en que los partidos políticos hayan excedido los topes a los gastos de precampaña y campaña que se establezcan para cada elección.

En la reforma en comento la figura de la Comisión Permanente Revisora no se contempla más como una Comisión Permanente de este Organismo, además de que hasta el momento de la aprobación del presente acuerdo existen diversos procedimientos de fiscalización que no pudieron ser concluidos por el entonces Órgano Auxiliar de este Cuerpo Colegiado, en virtud de los tiempos propios del inicio y conclusión de los procedimientos de fiscalización.

Por otro lado se tiene que los artículos transitorios del Decreto de reforma legal citados en el apartado de antecedente de este documento, establecen mecanismos para implementar por parte del Consejo General las disposiciones reformadas, transcribiéndose textualmente:

“SEGUNDO.- El nuevo esquema de fiscalización comenzará a operar a partir del primero de enero de dos mil doce. El Consejo General aprobará las reglas pertinentes para su adecuada aplicación.”

“QUINTO.- Los asuntos no contemplados en los presentes transitorios vinculados con asuntos administrativos, de quejas y denuncias o de fiscalización en materia electoral y que competan al Instituto, serán resueltos por Acuerdos del pleno del Consejo General.”

De la anterior transcripción se desprende que el Legislador facultó al Consejo General para acordar lo necesario para resolver cuestiones no previstas en temas administrativos y de fiscalización, como el que ahora nos ocupa, estableciendo además el inicio de operación del nuevo esquema de fiscalización, es decir a partir del día primero de enero del año dos mil doce.

4.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 del Código Electoral vigente el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones guíen todas las actividades del Instituto.

Asimismo, el artículo 89 en su fracción XIX del Código en comento indica que es atribución del Consejo General revisar que las actividades de los partidos políticos

se desarrollen con apego al Código de la materia y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

De igual forma, el citado diverso 89 fracciones I, II, XXIII y LIII del Código de la materia el Consejo General del Instituto Electoral del Estado tiene atribuciones para:

- a) Determinar las políticas y programas generales del Instituto y, expedir los reglamentos, circulares y lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus fines;
- b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el Código de la materia;
- c) Aprobar los dictámenes y proyectos de resolución en materia de fiscalización de acuerdo a las normas del código y las que en su caso emita el propio Consejo General; y
- d) Dictar los acuerdos necesarios a fin de cumplir las anteriores atribuciones y las demás señaladas por el Código Comicial Local.

En ejercicio de estas facultades, este Consejo General considera oportuno determinar el procedimiento a seguir en relación con la revisión y vigilancia del financiamiento de los partidos políticos registrados o acreditados ante este Instituto, de aquellos asuntos de fiscalización pendientes de resolución que han sido aludidos en el apartado de antecedentes del presente documento, en atención al Decreto del Honorable Congreso por el que reformó, entre otras cosas, el tema relativo a la fiscalización.

Lo anterior, en virtud de que, como consecuencia de la reforma electoral ha sido creada la figura de la Unidad de Fiscalización, instancia que revisará y vigilará la fiscalización de los partidos políticos a partir del día primero de enero del año dos mil doce, en relación de que de la literalidad del artículo SEGUNDO transitorio se desprende que el “*nuevo esquema de fiscalización*” comenzará a operar a partir del primero de enero del año dos mil doce.

Así las cosas el permitir que la Unidad de Fiscalización (figura legislativa de nueva creación) revise y vigile la fiscalización de los partidos políticos que han presentado ya sus diversos informes a la Comisión Revisora constituiría una violación a la garantías de debido proceso y de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La primera de ellas relativa al debido proceso, en virtud del cual toda autoridad, incluida la administrativa, debe substanciar de forma puntual el procedimiento previamente establecido por la ley, en el caso en concreto aquel que delegó a la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Esto es así, en virtud de que si se actualizara dicha hipótesis, los Institutos Políticos acreditados ante este Organismo se encontrarían ante una instancia diferente a la que primigeniamente conoció del tema por disposición reglamentaria, la cual además estableció diversos mecanismos operativos y técnicos para agilizar el desarrollo del procedimiento de fiscalización; por lo que se configuraría una infracción al principio de *“tribunal previamente establecido”*.

Es decir que la autoridad que en este caso deberá emitir el fallo relativo, deberá ser aquella que de forma previa fue facultada por la ley para hacerlo, en otras palabras ninguna autoridad diferente a la que sustanció el procedimiento puede emitir el dictamen o resolución respectiva, salvo el caso de tener facultades legales para ello, lo cual en la especie no opera en virtud del artículo SEGUNDO transitorio del multicitado Decreto del Honorable Congreso.

Sirve de sustento a lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos son los siguientes:

Registro No.202098
Localización
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Junio de 1996
Página: 845
Tesis: I.8o.C.13 K
Tesis Aislada
Materia(s): Común

GARANTIA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICION.

La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento..." implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 154/96. Rafael Nicolás Quezada. 22 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de mayo de 2003, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 123/2002 en que participó el presente criterio.

Registro No. 254197

Localización:
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
82 Sexta Parte
Página: 32
Tesis Aislada
Materia(s): Común

DEBIDO PROCESO LEGAL. El debido proceso legal, que está consagrado como garantía individual en los artículos 14 y 16 constitucionales, consiste básicamente en que para que una autoridad pueda afectar a un particular en su persona o en sus derechos, tal acto de afectación en principio debe estar precedido de un procedimiento en el que se oiga previamente al afectado, en defensa de sus derechos, dándole a conocer todos los elementos del caso en forma completa, clara y abierta y dándole también una oportunidad razonable, según las circunstancias del caso, para probar y alegar lo que a su derecho convenga; y el acto de afectación, en sí mismo, debe constar por escrito y emanar de autoridad legalmente facultada para dictarlo, y en dicho acto o mandamiento deben hacerse constar los preceptos legales que funden materialmente la afectación al individuo, así como los hechos que hagan que el caso actualice las hipótesis normativas y den lugar a la aplicación de los preceptos aplicados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 471/75. Mario J. Carrillo Vélez. 15 de octubre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Registro No. 254190
Localización
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
82 Sexta Parte
Página: 24
Tesis Aislada
Materia(s): Común

AUDIENCIA, GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO. La garantía de audiencia reconocida por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se contrae a una simple comunicación a la parte afectada para que tenga conocimiento de un acto de autoridad que pueda perjudicarlo, sino que implica el derecho de poder comparecer ante la autoridad a oponerse a los actos que afecten sus propiedades, posesiones o derechos y a exponer las defensas legales que pudiese tener, para lo cual, obviamente, es necesaria la existencia de un juicio en el que se observen, las formalidades esenciales del procedimiento, como lo expresa claramente el mencionado precepto constitucional, formalidades que están constituidas, de acuerdo con la teoría del proceso, por el emplazamiento para contestar demanda, un período para ofrecer y rendir pruebas y un plazo para presentar alegatos, a efecto de obtener una sentencia que declare el derecho en controversia, todo lo cual no puede ser satisfecho sino a través del debido proceso que exige el mencionado artículo 14 como garantía individual.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Toca 242/75. Rafael Prieto Torres. 3 de octubre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez.

Registro No. 200080

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

IV, Julio de 1996

Página: 5

Tesis: P./J. 40/96

Jurisprudencia

Materia(s): Común

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION.(sic)

El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.

Amparo en revisión 1038/94. Construcciones Pesadas Toro, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Amparo en revisión 1074/94. Transportes de Carga Rahe, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

Amparo en revisión 1150/94. Sergio Quintanilla Cobián. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.
Amparo en revisión 1961/94. José Luis Reyes Carbajal. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.
Amparo en revisión 576/95. Tomás Iruegas Buentello y otra. 30 de octubre de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teóduo Angeles Espino.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 40/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.

Aunado a estos criterios, este Consejo General considerar oportuno transcribir en este momento lo establecido por el Tribunal Electoral de esta Entidad Federativa en la resolución de fecha diecinueve de agosto del año dos mil cinco recaída al expediente número TEEP-AE-003/2005, a través del cual resolvió sobre el asunto especial, en relación al dictamen identificado como DIC/CRAF-004/04, cuya literalidad es la siguiente:

“... la normatividad con la que debe concluir el procedimiento fiscalizador es con la misma con la que se inició, por tratarse de una obligación surgida durante la vigencia de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, compuesta de diversos actos sucesivos que comprenden el mismo periodo de fiscalización de un año.

Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia S3ELJ07/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto:

“REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La Ley... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados

legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general, e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98.- Partido Revolucionario Institucional.- 24 de septiembre de 1998.- Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado.- Partido de la Revolución Democrática.- 26 de junio de 2003.- Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004.- Partido Verde Ecologista de México.- 11 de junio de 2004.- Unanimidad de votos.”

En consecuencia de las consideraciones previamente vertidas, en atención a lo que dispone el artículo QUINTO transitorio del Decreto por el que se reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales, este Consejo General considera oportuno acordar que la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, continúe con los procedimientos de fiscalización que dicha Comisión inició y desarrolló, y que a la fecha de la Reforma Electoral se encontraban pendientes de resolver.

Lo anterior con el objeto de dar consecución a los trabajos que en materia de fiscalización venía realizando dicho Órgano Auxiliar dentro de los procedimientos de fiscalización aludidos en los antecedentes de este documento.

Por lo tanto, a dicha Comisión se le ratifican las obligaciones y facultades que tanto el Reglamento de Fiscalización multicitado como los acuerdos del Consejo General le confirieron previamente a la publicación de la reforma a las disposiciones del Código Comicial Local.

En ese sentido, la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado deberá en todo momento observar de forma puntual e invariable el principio de continuidad procesal, así como las garantías de debido proceso y seguridad jurídica, en los términos establecidos en los párrafos previos.

5.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 fracción LVII y en atención a que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación es la Unidad Administrativa encargada de una de las etapas del procedimiento de fiscalización establecidas por el reglamento de la materia; es oportuno ratificar tanto las obligaciones y facultades que el Reglamento de la materia y los acuerdos del Consejo General le confirieron, es decir deberá coadyuvar con la Comisión Revisora en las actividades de fiscalización con los recursos humanos y técnicos con los que cuenta y bajo la estructura organizacional que previo a la reforma se había establecido, conservando bajo su resguardo la documentación y expedientes respectivos.

Esto será aplicable única y exclusivamente para los procedimientos de fiscalización que han sido iniciados o que deban ser iniciados en términos de la legislación reglamentaria de la materia previa a la publicación de la reforma electoral, mismos que son aludidos en el comunicado identificado como IEE/DPPM-0138/12, que se insertan a continuación.

Tipo de informe y período al que corresponde	Rubro del financiamiento	Partido político ó coalición	Instancia del IEE que lo tiene en revisión, conforme al procedimiento de fiscalización	Estado
Anual 2010	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		PRI	CG	Dictamen recibido por CG, sin observaciones al partido político, pendiente de resolver por CG
		PRD	CRAF	Informe consolidado recibido por CRAF, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		PT	CRAF	Informe consolidado recibido por CRAF, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		PVEM	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar al partido político
		MC	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones notificadas al partido político y con aclaraciones pendientes de análisis, pendiente de resolver por CG
		PNA	CRAF	Informe consolidado recibido por CRAF, con observaciones pendientes de notificar al partido político

Tipo de informe y período al que corresponde	Rubro del financiamiento	Partido político ó coalición	Instancia del IEE que lo tiene en revisión, conforme al procedimiento de fiscalización	Estado
Gastos de Campaña, Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009-2010	Actividades tendientes a la obtención del voto	CPP	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar a la coalición
		APA	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar a la coalición
		PT	CG	Dictamen recibido por CG, con observaciones pendientes de notificar al partido político
Tercer trimestre 2011	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	DPPPMC	Proceso de definir la existencia de observaciones a notificar a los partidos políticos, para que una vez que se reciban aclaraciones, se realicen los informes parciales que correspondan
		PRI	DPPPMC	
		PRD	DPPPMC	
		PT	DPPPMC	
		PVEM	DPPPMC	
		MC	DPPPMC	
		PNA	DPPPMC	
Cuarto trimestre 2011	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	DPPPMC	Proceso de definir la existencia de observaciones a notificar a los partidos políticos, para que una vez que se reciban aclaraciones, se realicen los informes parciales que correspondan
		PRI	DPPPMC	
		PRD	DPPPMC	
		PT	DPPPMC	
		PVEM	DPPPMC	
		MC	DPPPMC	
		PNA	DPPPMC	
Gastos de Campaña, Proceso Electoral Extraordinario 2011	Actividades tendientes a la obtención del voto	PAN	DPPPMC	Proceso de definir la existencia de observaciones a notificar a los partidos políticos ó coalición, para que una vez que se reciban aclaraciones, se realicen los informes consolidados que correspondan
		APU	DPPPMC	
		MC	DPPPMC	
		PNA	DPPPMC	
Anual 2011	Actividades Ordinarias y Medios de Comunicación	PAN	Se encuentra corriendo, en su caso, el plazo para que los partidos políticos presenten sus informes justificatorios	-----
		PRI		
		PRD		
		PT		
		PVEM		
		MC		
		PNA		

CG = Consejo General

CRAF = Comisión Revisora de la aplicación de los regímenes de financiamiento de los partidos políticos

DPPPMC = Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación

PAN = Partido Acción Nacional

PRI = Partido Revolucionario Institucional

PRD = Partido de la Revolución Democrática

PT = Partido del Trabajo

MC = Movimiento Ciudadano

PNA = Partido Nueva Alianza
CPP = Coalición Compromiso por Puebla
PVEM = Partido Verde Ecologista de México
APA = Coalición Alianza Puebla Avanza
APU = Coalición Alianza Puebla Unida

Lo anterior con el objeto de que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de comunicación del Instituto Electoral del Estado, observe de forma invariable el principio de continuidad procesal así como las garantías de debido proceso y seguridad jurídica, en los términos establecidos en líneas previas.

6.- Que, los artículos 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 80 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, mismos que han sido reformados a través de Decretos del Honorable Congreso del Estado de fechas veintiocho de octubre del año dos mil once y veinte de febrero del año dos mil doce respectivamente, establecen la nueva integración del Consejo General de este Organismo, estructura de la cual han sido suprimidas las figuras del Secretario General y Director General para dar paso a la figura del Secretario Ejecutivo, pero a la fecha de la aprobación del presente acuerdo, este Consejo General no ha designado al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva.

En este tenor, este Órgano Colegiado faculta al Consejero Presidente de este Instituto, Licenciado Jorge Sánchez Morales para que sea el funcionario electoral que realice de forma puntual las actividades que primigeniamente se encontraban delegadas al Secretario General dentro del procedimiento de fiscalización, con el objeto de no paralizar las mismas y dar continuidad a los procedimientos respectivo.

Lo anterior será aplicable única y exclusivamente para los procedimientos de fiscalización que han sido iniciados o que deban ser iniciados en términos de la legislación reglamentaria de la materia previa a la publicación de la reforma electoral, mismos que son aludidos en el comunicado identificado como IEE/DPPM-0138/12, que ha sido previamente trasunto en el apartado de antecedentes de esta documental.

Finalmente, una vez que este Cuerpo Colegiado designe al titular de la Secretaría Ejecutiva, se deberá entender delegadas las facultades que en este momento se otorgan al Consejero Presidente, en todos sus términos y alcances, por lo que el Secretario Ejecutivo será quien dará continuidad al procedimiento de fiscalización en coadyuvancia con las demás áreas que en dicho procedimiento se ven involucradas.

7.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 fracción LVII del Código Comicial Local, como consecuencia del multicitado artículo QUINTO transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de la materia, con el objeto de armonizar la actividad de fiscalización con los criterios tomados en los considerandos previos, este Máximo Órgano de Dirección recorre los plazos de fiscalización que se encontraban en curso hasta el momento de la publicación del referido Decreto para que continúen al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo.

Lo anterior, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a los Institutos Políticos al tener pleno conocimiento tanto del procedimiento de fiscalización, las reglas de operación a que están sujetos y obligados, así como las instancias de este Organismo que substanciarán dicho procedimiento, por lo cual las instancias pertinentes deberán realizar el cómputo de los plazos y hacerlo de conocimiento de los Partidos Políticos y a los integrantes de este Consejo General.

De igual forma, en términos del artículo SEGUNDO transitorio del Decreto multicitado, que dispone:

“SEGUNDO.- El nuevo esquema de fiscalización comenzará a operar a partir del primero de enero de dos mil doce. El Consejo General aprobará las reglas pertinentes para su adecuada aplicación.”

En atención a que el funcionario electoral titular de la Unidad de Fiscalización no ha sido designado por este Consejo, el cual dentro de las atribuciones señaladas en el artículo 109 ter apartado B, fracción I; del Código de la Materia se establece:

“ARTÍCULO 109 ter.- El Instituto contará con una Unidad de Fiscalización adscrita al Consejero Presidente, cuya finalidad será auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos, los informes justificatorios que presenten sobre el origen y uso de todos sus recursos anuales, de precampaña y campaña, según corresponda.

...

B. La Unidad tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento de la materia, y los demás acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en este Código;”

De la disposición legal previamente transcrita se desprende que el titular de la Unidad de Fiscalización tiene la facultad de elaborar el proyecto de Reglamento de la Materia, sometiéndolo a la aprobación del Consejo General por lo que, con el objeto de no dejar en estado de indefensión o afectar la esfera jurídica de los Partidos Políticos sujetos a revisión, de otorgar total certeza a los mismos, así como de armonizar las disposiciones contemplados en la reforma al Código de la materia, este Órgano Colegiado determina que en el lapso que corre del primero de enero del año

dos mil doce a la fecha en que el Consejo General apruebe la normatividad aludida, los Institutos Políticos tendrán que ejercer y comprobar los ingresos y egresos que registren conforme a lo dispuesto en el reglamento de fiscalización vigente a esta fecha.

No obstante, presentaran los informes justificatorios y se sujetaran al *nuevo esquema de fiscalización* aludido en el transitorio segundo del multicitado decreto por el que reforma el Código Electoral Local, conforme lo dispone el artículo 52 bis, apartado A, fracción II, cuya literalidad es la siguiente:

“ARTICULO 52 bis.- Los partidos políticos deberán rendir ante la Unidad de Fiscalización del Instituto, los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

A.- Informes anuales:

...

II.- Se reportarán los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Esto sin perjuicio de que los partidos políticos estén obligados a presentar informes trimestrales en los que se deberá entregar la documentación justificatoria de ese periodo, en los términos y formas que se indiquen en el respectivo reglamento que para ello emita el Consejo General.”

La disposición trasunta previamente (misma que es resultado de la última Reforma Electoral) se contrapone con lo consignado en el artículo 105 fracción IV del Código Comicial Local, ya que en dicho diverso indica que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tiene la siguiente facultad:

“ARTÍCULO 105.- La Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tendrá las atribuciones siguientes:

...

IV.- Coordinar la entrega a los partidos políticos nacionales o estatales con registro, del financiamiento público al que tienen derecho y **recibir de ellos los informes justificatorios y comprobantes de su aplicación;**”

En base a lo anterior, este Consejo General toma el acuerdo de que la instancia receptora de todos los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad del financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al año dos mil doce y subsecuentes a que hacen referencia los artículos 52 bis y 105 fracción IV, del Código Comicial Local, sea única y exclusivamente la Unidad de Fiscalización.

Lo anterior, en virtud de que este Consejo General ha sido facultado por el legislador para emitir los acuerdos necesarios relacionados con todos aquellos asuntos que en materia administrativa y de fiscalización no sean contemplados en los transitorios de la Reforma Electoral, aunado a esto, la medida en comento permitirá otorgar plena certeza de la Unidad Receptora a la que los Institutos Políticos sujetos de revisión deberán presentar los informes correspondientes al año dos mil doce en adelante.

Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, cuyo rubro y texto es el siguiente:

Registro No. 160927
Localización:
Décima Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro I, Octubre de 2011
Página: 598
Tesis: P. XXXV/2011 (9a.)
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO. EL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ELECTORAL DE LA ENTIDAD, QUE LO FACULTA PARA MODIFICAR LOS PLAZOS DEL PROCESO ELECTORAL CUANDO EXISTA IMPOSIBILIDAD DE LLEVARLOS A CABO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA El citado precepto al establecer que el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco podrá modificar los plazos de las diversas etapas del proceso electoral en elecciones tanto ordinarias como extraordinarias, cuando a su juicio exista "imposibilidad" para realizar, dentro de aquellos plazos, los actos señalados por la propia ley o en la convocatoria respectiva, no viola el principio de certeza en materia electoral garantizado en la fracción IV, inciso b), del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, ya que el vocablo "imposibilidad", según el Diccionario de la Real Academia Española, significa la falta de posibilidad para existir o para hacer algo, por lo cual el ejercicio de la facultad en comento se condiciona a un elemento objetivo conforme al cual todos los participantes en el proceso electoral conocen previamente con claridad y seguridad las reglas a las que su actuación y la de las autoridades electorales están sujetas, por lo que sólo en el caso de que no exista posibilidad de llevar a cabo el proceso electoral en los plazos señalados por la ley o la convocatoria correspondiente, dicho Consejo podrá modificarlos. Además, si bien es cierto que el artículo 33, párrafo primero, de la Ley Electoral de la Entidad prevé que cuando a juicio del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana exista imposibilidad de llevar a cabo el proceso electoral en los plazos establecidos los podrá modificar, también lo es que dicha facultad deberá ejercerla fundada y motivadamente, justificando con precisión qué hecho motiva la imposibilidad de llevar a cabo el proceso electoral en los plazos previstos y el porqué incide en dichos plazos, a efecto de que, en su caso, los actores políticos puedan impugnar ante las instancias electorales correspondientes

dicho acto. Lo anterior, debido a que la imprevisibilidad de todo tipo de eventos que en un momento determinado pueden llegar a impedir el normal desarrollo del proceso electoral, hace innecesario -por imposible- que el legislador prevea todas y cada una de las posibles contingencias que pudiesen presentarse.

Acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009. Partido de la Revolución Democrática y Diputados integrantes del Congreso del Estado de Tabasco. 26 de marzo de 2009. Mayoría de siete votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Nínive Ileana Penagos Robles, Mario César Flores Muñoz y Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número XXXV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once.

8.- Que, en términos de lo establecido en el artículo 91 fracción XXIX, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, este Órgano Superior de Dirección faculta al Consejero Presidente del Organismo, para hacer de conocimiento el presente acuerdo a:

- a) Al Consejero Presidente de la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, así como a la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, para su conocimiento y debida observancia.
- b) Los Titulares de los Órganos de Administración de los sujetos a revisión que participaran en los procesos de fiscalización materia del presente acuerdo, para su conocimiento y debida observancia.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89 fracción LIII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado establece la continuidad de los procedimientos de fiscalización llevados a cabo por este Organismo, derivado del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, publicado en el Periódico Oficial en fecha veinte de febrero del año dos mil doce, en los términos establecidos en el considerando número 3 de este acuerdo.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acuerda que la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento a los

Partidos Políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, continúe con los procedimientos de fiscalización que dicha Comisión inició y desarrolló, y que a la fecha de la Reforma Electoral se encontraban pendientes de resolver, según lo consignado en el considerando 4 del presente instrumento.

TERCERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado determina que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, coadyuve con la Comisión Revisora en las actividades de fiscalización, en términos de lo establecido en el considerando 5 de este acuerdo.

CUARTO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado faculta al Consejero Presidente de este Instituto para que sea el funcionario electoral que realice de forma puntual las actividades que se encontraban delegadas al Secretario General dentro del procedimiento de fiscalización hasta la designación del Secretario Ejecutivo, en los términos plasmados en el considerando 6 del presente acuerdo.

QUINTO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprueba recorrer los plazos de los procedimientos de fiscalización que se encontraban en curso hasta el momento de la publicación del Decreto por el que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, para que continúen al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo, en los términos señalados en el considerando 7 de esta documental.

SEXTO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado determina que en el lapso que corre del primero de enero del año dos mil doce a la fecha en que el Consejo General apruebe la normatividad aplicable, los Institutos Políticos tendrán que ejercer y comprobar los ingresos y egresos que registren conforme a lo dispuesto en el reglamento de fiscalización vigente a esta fecha, así como que la instancia receptora de los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad del financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al año dos mil doce y subsecuentes a que hacen referencia los artículos 52 y 105 fracción IV del Código Comicial Local sea única y exclusivamente la Unidad de Fiscalización, en los términos plasmados en el considerando número 7 del presente acuerdo.

SÉPTIMO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado faculta al Consejero Presidente de este Instituto para que notifique el contenido del presente acuerdo a

- a) Al Consejero Presidente de la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado así como a la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, para su conocimiento y debida observancia.
- b) Los Titulares de los Órganos de Administración de los sujetos a revisión que participaran en los procesos de fiscalización materia del presente acuerdo, para su conocimiento y debida observancia.

Conforme lo establecido en el considerando número 8 de este Acuerdo.

OCTAVO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en sesión especial de fecha catorce de marzo del año dos mil doce.

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIA DEL CONSEJO

LIC. JORGE SÁNCHEZ MORALES

DRA. ALICIA OLGA LAZCANO PONCE